

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>MATERIA</b>    | : AUTO DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES |
| <b>DEMANDANTE</b> | : ROMAN JACOB ARQUEROS PIZARRO         |
| <b>DEMANDADO</b>  | : CONSTRUCTORA FAPISA S.A. Y OTRAS     |
| <b>RIT</b>        | : O-6600-2020                          |
| <b>RUC</b>        | : 20-4-0301355-3                       |

Santiago, cinco de octubre de dos mil veintidós.

**VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO.**

**PRIMERO. PARTES LITIGANTES Y MATERIA.**

Que ante este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en los autos R.I.T. O-6600-2020 por despido nulo, indirecto y cobro de prestaciones e indemnizaciones, solicitado en procedimiento de aplicación general.

La demanda fue interpuesta por don PABLO ANDRES TAPIA VELASQUEZ, abogado, cédula de identidad número 8.573.064-9, con domicilio en Huérfanos número 1055-A, oficinas número 202-207, comuna y ciudad de Santiago, en representación de don **ROMAN JACOB ARQUEROS PIZARRO**, empleado, con domicilio en calle Tiepolo número 9009, comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago; en contra de **CONSTRUCTORA FAPISA S.A.**, empresa del giro construcción, **INVERSIONES LAS PATAGUAS SPA**, empresa del giro inversiones; **TRANSPORTES LAS PATAGUAS SPA**, empresa del giro transportes, **INMOBILIARIA LOS ABEDULES SPA**, del giro inmobiliario, todas representadas por JANIO DANILO PIZARRO RIOS, factor de comercio, todos con domicilio en Avda. Francisco Bilbao número 398, comuna de Providencia.

**SEGUNDO. SÍNTESIS DE LOS HECHOS Y ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE.**

Sostuvo que ingresó a prestar servicios personales, bajo vínculo de subordinación y dependencia para CONSTRUCTORA FAPISA S.A. con fecha 22 de noviembre de 2009.

Posteriormente, el 1 de noviembre del año 2012, hay una actualización y modificación del contrato. Luego, y debido a un nuevo contrato de fecha 1 de abril de 2014 se modificaron las condiciones consignadas en los dos instrumentos anteriores, siendo la principal, el cargo que paso a desempeñar como jefe de adquisiciones, la remuneración y reconociéndose la antigüedad laboral. Las labores las cumplió en el mismo domicilio de la empresa demandada, esto es, en la comuna de Providencia y en ocasiones las cumplió en las distintas obras que se ejecutaban por parte la demandada dentro de la Región Metropolitana.

Cumplía jornada ordinaria de trabajo de 45 horas a la semana, distribuidas de lunes a viernes en horario de 08:30 a.m. a 13:00 horas y de 14:00 a 18:30 horas.



Su remuneración estaba constituida por un sueldo base de \$1.789.202; gratificación por \$126.865; asignación por movilización por \$12.000 y asignación de colación por \$30.000, siendo el total para efectos indemnizatorios de \$1.958.067.

Con motivo de los graves incumplimientos al contrato de trabajo y a la legislación laboral por parte del ex empleador, decidió poner término a su contrato por lo vía del despido indirecto del artículo 171 del Código del Trabajo con fecha 28 de septiembre de 2020, cumpliéndose con los requisitos del artículo 162 del Código del Trabajo, enviando la correspondiente comunicación con copia a la Inspección del Trabajo en la misma fecha.

Las cuatro empresas demandadas comparten mismo domicilio, mismos dueños y ejercen giros complementarios para la unidad del negocio y bajo una unidad de dirección común.

Es así, que todas las empresas demandadas se interrelacionan bajo una misma dirección común, complementando sus giros para lograr un beneficio común. Incluso no sólo prestó sus servicios para la Constructora Fapisa, sino que también para una o varias de las otras.

En su relación societaria/accionaria las empresas demandadas se relacionan entre sí de la siguiente manera:

Inversiones Las Pataguas SPA, RUT 76.079.136-9, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Janio Pizarro Ríos, dueño del 80% de las acciones.

Transportes Las Pataguas SPA, RUT 76.084.821-2, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Inversiones las Pataguas dueña del 100% de las acciones

Inmobiliaria Los Abedules SPA, RUT 76.222.582-4, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Janio Pizarro Ríos dueño del 100% de las acciones.

Constructora Fapisa S.A. RUT 77.737.330-7, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Janio Pizarro Ríos dueño del 98% de las acciones.

En tanto, y en lo que dice relación a cómo se relacionan estas empresas y complementan en el negocio común (el rubro de la construcción y el inmobiliario), se da del siguiente modo principalmente, sin perjuicio otras interrelaciones:

Inversiones Las Pataguas arrienda a Constructora Fapisa principalmente vehículos (camionetas) y equipos de construcción.

Transportes Las Pataguas arrienda a Constructora Fapisa camiones con sus conductores y mecánicos.

Constructora Fapisa es la empresa que construye para terceros obras de ingeniería civil, proyectos inmobiliarios, pero también



lo ha hecho para empresas relacionadas como Inmobiliaria Los Abedules SpA. En la actualidad se encontraba en proyecto de construir un edificio en calle Bulnes, Santiago Centro, para Inmobiliaria Los Abedules, proyecto que se encuentra detenido.

Constructora Fapisa subarrienda a las empresas antes mencionadas su domicilio principal (oficina central) y todo el *back up* de personal necesario, tanto administrativo como otros.

Las cuatro demandadas usufructuaron de su trabajo, sin embargo solo tenía contrato de trabajo por la empresa constructora, lo que constituye claramente un subterfugio, para eludir el pago del finiquito del actor, ya que estima que se ha distraído/ocultado el patrimonio del *Holding* a objeto de eludir el pago de las eventuales indemnizaciones laborales del trabajador y para perjudicarlo en una clara muestra de mala fe. Se trata de burlar los derechos del actor ocultando sus patrimonios dividiéndolo en otras razones sociales.

Agregó que por no haber estado totalmente pagadas las cotizaciones previsionales en la AFP Cuprum, AFC Chile e Isapre Cruz Blanca el despido es nulo y deberán pagarse las remuneraciones íntegras hasta que se convalide el despido conforme al artículo 162i inciso 5° del Código del Trabajo.

En base a lo anterior solicitó que:

Se declare que el despido del actor es justificado, debido o procedente por haber incumplido el ex empleador gravemente las obligaciones del contrato de trabajo y/o de la legislación laboral.

Se ordene el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo por la cantidad de \$1.958.067.

Se ordene el pago de las indemnizaciones por años de servicios por 10 años y fracción superior a seis meses por \$21.538.737.

Se ordene el pago del recargo legal del 50% de las indemnizaciones por años de servicios por \$10.769.368.

Se ordene el pago del feriado proporcional por \$1.534.789 y feriado legal por 81 días correspondiente a \$4.830.845.

Se declare que el despido (autodespido) es nulo y se aplique la sanción del artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, debiendo las demandas pagar las remuneraciones íntegras y hasta que se convalide el despido.

Se declare que las cuatro demandadas constituyen una Unidad Económica y conforme tal deben responder solidariamente al pago de las indemnizaciones y demás prestaciones laborales demandadas.



Se declare que las empresas han incurrido en subterfugio y se las condene al pago del máximo de 150 UTM, monto del que deberán responder solidariamente.

Que las sumas que se ordenen pagar lo sean con los reajustes e intereses que correspondan según lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

El pago de costas procesales y personales.

**TERCERO. SÍNTESIS DE LOS HECHOS Y ALEGACIONES DE LA DEMANDADA.**

a) CONSTRUCTORA FAPISA S.A.

Sostuvo que es efectivo que el trabajador ingresó a prestar servicios en los términos señalados en la demanda.

Negó que no se le hayan pagado las cotizaciones de AFP, y de AFC los meses de junio, julio y agostos del 2020 y la Isapre del mes de julio y agosto del año 2020; que haya incumplido gravemente las obligaciones propias del contrato de trabajo en los términos esgrimidos en la carta de autodespido; que se ha pagado el seguro complementario de salud para el grupo familiar este año 2020 de BICE VIDA; que no se ha cumplido con la obligación del artículo 184 del Código del Trabajo en orden a proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, y todo lo relatado por el actor sobre estos mismos hechos. En lo relativo a los supuestos incumplimientos en los protocolos COVID-19, negó tajantemente y es COMPLEMENTE FALSO todo lo enunciados por la contraria; que no se ha pagado el aguinaldo de fiestas patrias del mes de septiembre de 2020; que se le adeude remuneraciones en los términos señalados en el libelo y en la carta de autodespido; que se le haya obligado a trabajar estando en suspensión laboral en los términos señalados en el libelo y en la carta de autodespido; que exista unidad económica en los términos señalados por el demandante; que exista subterfugio en los términos señalados por el demandante.

Manifestó que no han sido transgredidas ni incumplidas por su parte las obligaciones laborales.

En subsidio de las alegaciones anteriores, y para el improbable evento de que se las deseche, solicito el rechazo de la demanda, por ser absoluta y totalmente improcedente la declaración de nulidad del despido demandada.

Refirió que no cabe la sanción de nulidad del despido, ha dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones de declaración y pago.

En cuanto a la indemnización sustitutiva del aviso previo, tratándose de un auto despido injustificado, no se adeuda monto alguno por este concepto.



En cuanto a la indemnización por años de servicio solicitada, según ya se ha dicho, la indemnización solicitada, habiéndose producido un auto despido total y absolutamente injustificado, no se reúnen los requisitos necesarios para que ello sea procedente, por lo tanto, nada se le adeuda por este concepto.

**CUARTO. ACTUACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA.**

Que, una vez terminada la etapa de discusión, se llamó a las partes a una conciliación, la que no se produjo.

Se fijaron como hechos pacíficos:

La existencia de la relación laboral, la fecha de inicio, las funciones, la fecha de término el 26 de julio de 2021 y que se puso término por la causal de autodespido, invocando el artículo 171 en relación con el artículo 160 N°7, cumpliendo las formalidades legales.

Luego el Tribunal procedió a recibir la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que debía recaer la actividad probatoria:

1) Remuneración pactada y efectivamente percibida por la demandante.

2) Efectividad de los hechos contenidos en la carta de autodespido, pormenores y circunstancias.

3) Periodos en el cual se habrían verificado las infracciones que son fundantes del autodespido y si aquellas permiten configurar el perdón de ofendido invocada por la demandada.

4) Si la demandada otorgó o en su defecto compensó el feriado legal y proporcional que se reclama.

**QUINTO. MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDANTE.** Que, para acreditar sus asertos, en la audiencia de juicio respectiva y en mérito de la interlocutoria de prueba dictada, la actora procedió a rendirla en los siguientes términos:

**I.- Documental:** Se incorporan los siguientes documentos:

1. Comprobante de Correos y carta de auto despido de fecha 28 de septiembre de 2020.

2. Contrato de Trabajo año 2014, Contrato de Trabajo del año 2012, Contrato de Trabajo año 2009, Anexo Contrato de Trabajo de 23 marzo 2010.

3. Liquidaciones de sueldo de enero a agosto 2020, y de octubre a diciembre 2020.

4. Dictamen 1283 de marzo 2020 que norma sobre medidas de higiene y seguridad con motivo de la pandemia y otras materias.

5. Liquidación seguro de vida Bice Vida.

6. Detalle Póliza Bice Vida noviembre 2019.

7. Comprobante recepción y factura Póliza Bice Vida.

8. Certificado de AFC Chile de fecha septiembre de 2020.



9. Certificado Isapre Cruz Blanca de fecha septiembre de 2020.

10. Certificado AFP Cuprum de fecha septiembre de 2020.

11. Set de Emails meses de septiembre a noviembre 2019.

## **II. Absolución de posiciones.**

Absolvió posiciones don Julio Salvo como representante de la demandada CONSTRUCTORA FAPISA S.A. en relación a los representantes de las otras demandadas, solicitó se haga efectivo el apercibimiento legal.

## **III. Testimonial.**

Previo juramento de rigor declararon José Luis Gómez Arcila y doña Domenica Alejandra Diocares García.

## **IV. Oficios.**

1. AFP Cuprum

2. AFC Chile

3. INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA.

4. BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## **V. Exhibición:**

Respecto de todas las demandadas.

1. Copias de las escrituras de constitución social y sus modificaciones. (Cumplido)

Respecto la demandada FAPISA S.A.:

1. Liquidaciones de remuneraciones año 2019 y 2020. (Cumplido)

2. Registro de asistencia del actor año 2019 y 2020. (No cumplido)

3. Contrato de seguro BICE VIDA años 2018, 2019, 2020 con indicación o detalle de los trabajadores acogidos al seguro o beneficiarios del mismo e indicación periodo de cobertura. (No Cumplido)

4. Exhibición de los comprobantes de pago de aguinaldos fiesta patria años 2018, 2019 y 2020 y de liquidaciones y comprobantes de su pago los meses de marzo a septiembre de 2020. (No Cumplido)

5. Copia de todos los protocolos de higiene y seguridad implementadas el año 2020 con motivo la pandemia, inducciones de higiene, copias de las facturas de compra elementos de seguridad implementadas, copia del reglamento interno de higiene y seguridad, copia de las inducciones o charlas de inducción de higiene y seguridad a los trabajadores y firmados por estos, en especial la actora. (No Cumplido)

6. Copia de la factura de compra N° 36 de Mayo de 2020 y comprobante de reembolso se su importa por \$25.470 al actor. (No Cumplido).



La parte demandante pide se hagan efectivos los apercibimientos legales respecto de los documentos solicitados exhibir y que no se exhibieron, evacuado el traslado por la demandada el Tribunal resuelve dejarlo para sentencia definitiva.

**SEXTO. MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDADA FAPISA S.A.**

Que en la misma audiencia la demandada rindió la siguiente prueba:

**I.- Documental:** Se incorporaron los siguientes documentos:

1. Contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2014 entre las partes de autos.

2. Certificado de pago de cotizaciones previsionales emitido por Previred periodo diciembre 2009 a diciembre de 2011.

3. Certificado de pago de cotizaciones previsionales emitido por Previred periodo enero 2012 a diciembre de 2014.

4. Certificado de pago de cotizaciones previsionales emitido por Previred periodo enero 2015 a diciembre de 2017.

5. Certificado de pago de cotizaciones previsionales emitido por Previred periodo enero 2018 a septiembre de 2020.

6. Planilla de pago AFP Cuprum pago cotizaciones previsionales junio 2020.

7. Liquidaciones de sueldo todo el periodo 2018, todo el periodo 2019, y liquidaciones de sueldo desde enero 2020 a septiembre 2020.

8. Prueba nueva. Comprobante de pago Cruz Blanca respecto de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020,

**II. Testimonial.** Previo juramento y promesa de rigor declaró don Jorge Riffo Domínguez, Maiquel Cortes Sola y don Luis Humberto Colipi Nahuelcura.

**SÉPTIMO. HECHOS ACREDITADOS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.**

Que valorada la prueba rendida, conforme y con respeto a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, es posible tener por establecido lo siguiente:

1) Que se puso término a la relación laboral mediante el autodespido del trabajador con fecha 28 de septiembre de 2020 mediante carta enviada por correo certificado el mismo día. La carta se fundamentó en la causal del artículo 160 N° 7 en relación con el 171 del Código del Trabajo, indicando:

*"En conformidad lo que permite el artículo 171 del Código del Trabajo, en relación con el art. 160 N° 7 del Código del Trabajo, vengo en comunicar a Ud. Que con fecha 28 de septiembre de 2020, he decidido poner término al contrato de trabajo, que me unía con*



su representada, en razón de los graves y reiterados incumplimientos a las obligaciones laborales en que ha incurrido, siendo principalmente las siguientes:

1) Se me ha menoscabado mi condición de trabajador de la empresa como Jefe Adquisiciones. Desde el mes de Octubre de 2019 se me ordenó capacitar a tres constructores civiles para cumplir parte de las funciones que eran de mí exclusiva responsabilidad. En especial se me restó la labor de adquisición de insumos y el control de compras para las distintas obras de la empresa, las que pasaron a realizarse en su mayoría por estas personas y pese a yo haber reclamado esta situación, con ello, generándose un descontrol en la calidad de los insumos adquiridos, que es de mi responsabilidad. Esta situación constituye un menoscabo en mi status dentro de la empresa, además, de constituir un incumplimiento al contrato de trabajo ya que se me ha quitado, negado por FAPIS A el trabajo convenido, situación de suma gravedad, toda vez, que se me impide, limita y resta el control de mis funciones, pero no se me quita la responsabilidad respecto de los otros dependientes y terceros, con ello, estas personas pasaron a depender directamente de Gerencia.

2) No se me han pagado las cotizaciones de AFP, y de AFC los meses de Junio, Julio y Agosto y la Isapre el mes de Julio y Agosto, todos del 2020. Esto me ha producido un grave perjuicio en mis atenciones de salud y en mi ahorro previsional.

3) No se me ha pago la remuneración del mes de Agosto de 2020 por 8 días y sin explicaciones. Asimismo, debo manifestar que en el mes de marzo y abril del año en curso, estando en régimen de suspensión laboral, mi empleador me impuso realizar labores profesionales para el mismo.

4) No se ha pagado el seguro complementario de salud para el grupo familiar este año 2020 de BICE VIDA y que sí se nos otorgó a los trabajadores los años 2019 y los anteriores, por lo que este beneficio, pasó a ser un derecho adquirido conforme a la ley.

5) No se ha cumplido con la obligación del art. 184 del Código del Trabajo en orden a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

En efecto, respecto a esta situación la empresa ha incumplido sus obligaciones en razón de los siguientes hechos: Al volver al trabajo presencial en la oficina matriz, el día 07 de septiembre de 2020 no había ninguna norma de cumplimiento de los nuevos protocolos Covid, a no ser un par de dispensadores de alcohol gel y un limpia pies, pero sin algún liquido sanitizante. No había instrucciones, no hubo inducción de las normas Covid, no hubo





separación de espacio, ni protecciones, ni señalética. En otro orden no Covid, no he recibido implementos de seguridad desde el año 2016, ni inducciones, ni el derecho a saber, ni siquiera copia del reglamento interno de la empresa.

6) No se me ha pagado el aguinaldo de fiestas patrias del mes de septiembre de 2020, lo que sí ocurrió en todos los años anteriores, por lo que este beneficio pasó a ser un derecho adquirido en conformidad a la ley.

7) No se me ha reembolsado el valor pagado por mí y cuya cuenta se rindió en mayo de 2020. El 12/05/2020, compro amonio cuaternario y pago en efectivo la factura N°36, debido a que el gerente general de la empresa se encontraba con Covid. Yo no tengo asignación de fondos por rendir, por lo que el dinero gastado era de mi propiedad y se me indica rendirlo a través de una caja chica, por el monto de \$25.470.

Todas estas situaciones de hecho descritas en los numerales del 1) al 7), constituyen un grave "Incumplimiento a las obligaciones que impone el contrato de trabajo" y a la legislación laboral, razón por la cual doy por terminada mi relación laboral con su representada, FAPISA S.A., a contar de la fecha antes indicada y por las razones descritas.

Informo que demandaré judicialmente por las indemnizaciones y demás prestaciones laborales que se me adeudan y por aquellas que legalmente me corresponden por el término de la relación laboral a causa de los incumplimientos acusados"

Se acreditó el punto respecto a la carta de autodespido y sus formalidades al acompañarse la misma y sus respectivos comprantes de envió, y además no fue algo controvertido por las demandadas.

3) Que al trabajador se le adeuda el pago de feriado proporcional y feriado legal por 81 días en conformidad al artículo 73 del Código del Trabajo.

El empleador no rindió prueba alguna tendiente a acreditar que solucionó el feriado proporcional al término de la relación laboral, y tampoco rindió ni exhibió documentos que diesen cuenta que gozo durante la vigencia legal de los feriados demandados, sin perjuicio que su empleador no se hizo cargo expreso de tal petición en su contestación ni tampoco fue controvertido el punto por las demás demandadas al encontrarse en rebeldía.

4) Que su última remuneración corresponde a \$1.958.067.

Se acreditó el punto mediante la liquidación de remuneraciones de mayo de 2020 que consigna un sueldo base \$1.789.202, gratificación de \$126.856, movilización por \$12.000 y colación \$30.000, siendo esta la última que corresponde a 30 días trabajados.



**SÉPTIMO. EN CUANTO AL DESPIDO INDIRECTO.**

Que la carta de auto despido da cuenta de los siguientes incumplimientos que se le imputan a la empresa y que se reiteran en la acción presentada en su contra:

1) Que se lo menoscabó en su condición de trabajador desde octubre de 2019, al ordenándole capacitar a tres constructores civiles para cumplir parte de las funciones que eran de su responsabilidad.

Sobre el punto se aportó la declaración del testigo José Luis Gómez Arcila, quien, en el punto atinente, explicó en forma general que trabajó con el actor, refiriendo que el demandante era jefe de adquisiciones. Detalló que Daniel Muñoz funcionaba directamente en las obras, cotizando y comprando bajo el mandato del actor. Refirió que en 2019 comenzó hacer funciones que eran del actor y también comenzaron los jefes de obra a realizar compras, lo que causó la molestia del demandante, pues al comprar los jefes de obra en forma directa aquello no pasaba por el actor, pero cualquier problema tenía que responder él. Agregó que el autodespido del actor fue por tema de cotizaciones y falta de seguridad por los protocolos COVID.

La testigo Domenica Alejandra Diocares García no aportó información sobre el supuesto incumplimiento alegado.

Al absolver posiciones el representante legal dio cuenta que el actor era el encargado de adquisiciones, negando que en el año 2019 se le hayan cambiado sus condiciones de trabajo, pues fue siempre el jefe de adquisiciones y no se le agregaron nuevas funciones. Reconociendo que sí se la había pedido capacitar a los administradores de obra u oficinas técnicas para poder adquirir cuando era una obra que estaba fuera de Santiago.

Los contratos de trabajo aportados dan cuenta que la última función del demandante era la de jefe del departamento de adquisiciones.

Ahora los testigos de la parte demandada Jorge Riffo Domínguez y Maiquel Cortés Sola reconocen que el actor debía capacitar a los nuevos administradores de obras, detallando Cortés que aquello se hizo para agilizar el proceso en las obras o faenas.

Sobre el incumplimiento alegado no se observa en qué forma podía ser un menoscabo en su status dentro de la empresa, y tampoco que se le haya quitado o negado el trabajo convenido al tener que capacitar a los administradores de obras para que ellos pudiesen adquirir en forma directa sin pasar por su departamento, pues justamente el hecho que los capacitase buscaba que estos no cometiesen errores, y también aparece razonable que los



administradores de obra pudiesen adquirir directamente sin pasar por la oficina central para agilizar los procesos, como fue explicados por los testigos de la demandada. Así las cosas, el desacuerdo que pueda tener el actor sobre aquello no puede por sí solo considerarse como un incumplimiento de contrato en los términos anotados y está dentro de las facultades de organización que puede realizar el empleador en miras a mejorar sus resultados.

2) Que se sostiene como segundo incumplimiento el no pago de cotizaciones de AFP y AFC de los meses de junio, julio y agosto y la Isapre del mes de julio y agosto, todos del 2020.

La parte demandada sostiene que no es efectivo que no haya pagado dichas cotizaciones.

Entonces, siendo de cargo de la parte demandada acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales aportó la siguiente prueba relevante.

Efectivamente del certificado de pago de cotizaciones previsionales aportados por la demandada no aparece pagada ni declarada AFP CUPRUM y AFC de junio de 2020 y la cotización de julio de 2020 se pagó el 10 de diciembre de 2020 y agosto de 2020 el 23 septiembre de 2020. En cuanto a Isapre Cruz Blanca no aparece pagada ni declarada cotización de julio y agosto de 2020, siendo que en dichas liquidaciones aparecen dichos ítems bajo la mención "Ley Suspensión del Empleo".

Ahora el oficio de AFP Cuprum da cuenta que la cotización de junio de 2020 fue pagada el 25 de septiembre de 2020.

Se suma a lo expuesto certificados aportados por la demandante fechado el 24 de septiembre de 2020 en que no figura ni como declarada y/o pagado las cotizaciones de AFP Cuprum de junio, julio y agosto de 2020, ni declarada ni pagada las cotizaciones de julio y agosto de 2020 del certificado de 24 de septiembre de 2020 de Isapre Cruz Blanca.

En atención a ello, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 21.227, lo cierto es que la obligación del empleador es la de declarar las cotizaciones previsionales y seguridad social independientemente de la posibilidad de pagar estas en parcialidades en conformidad a la ley citada, pero cosa distinta es no haberlas declarado, por lo que en este caso sí existe el incumplimiento alegado por el trabajador en su carta de autodespido, pues ni siquiera a la fecha aún ha sido solucionada la del mes de junio de 2020 respecto de la cotización de salud y AFC, lo que se corrobora incluso con la prueba nueva rendida.

3) Que no se le pagó su remuneración del mes de agosto de 2020 por 8 días.



La parte demandada en términos genéricos indica que no se adeudan remuneraciones.

Se aportó liquidación de remuneraciones del mes de agosto de 2020, la que no fue impugnada ni controvertida, en que figura con ningún día trabajado en dicho mes, pero tampoco se indica que se haya encontrado sujeto a licencia médica por el período referido y tampoco se aportó el registro de asistencia, siendo un hecho no discutido que el actor tenía una jornada de 45 horas a la semana, distribuidas de lunes a viernes en horario de 08:30 a.m. a 13:00 horas y de 14:00 a 18:30 horas, por lo que siendo de cargo del empleador acreditar que cumplió con sus obligaciones laborales, en especial el pago de remuneraciones, resulta que la información aportada por la demandada es insuficiente como para entender que cumplió con la obligación de pagar las remuneraciones del demandante, considerando además que se le solicitó exhibir el registro de asistencia lo que no fue cumplido, siendo de aquellos documentos que debiese estar en su poder, por lo que se suma lo concluido el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo.

En consecuencia, también se encuentra probado el incumplimiento alegado.

4) Que estando en régimen de suspensión laboral en marzo y abril 2020 se le impuso realizar labores profesionales.

La parte demandada no aportó el registro de asistencia, siendo de aquellos documentos que debiese estar en su poder, por lo que el tribunal ya podría hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, en cuanto a que prestó funciones los meses referidos.

En este punto la testigo Diocares García, quien indicó ser secretaria de la demandada FAPISA, refirió que cuando desconfinaron volvieron a la oficina, pero luego les suspendieron el contrato, pero el actor tuvo que trabajar desde casa, lo que le consta por los correos que llegaban desde las obras y además él le comentó que le toco trabajar y que no le pagaron sus remuneraciones, exhibiéndoles sus liquidaciones. Tal situación fue a fines de marzo, y volvieron en abril, y luego los volvieron a mandar para la casa volviendo en agosto, aunque no recuerda las fechas exactas.

Al absolver posiciones el representante legal de la empresa indicó que se *"acogieron a la suspensión laboral"*, reconociendo el testigo de la demandada Riffo Domínguez que estuvieron con la ley de Protección al Empleo de marzo a septiembre de 2020 y que, cuando estuvieron en fase 2, volvieron a reincorporarse a las labores.



En consecuencia de la prueba rendida y lo indicado en especial por los testigos referidos no queda duda que el actor se encontró sujeto a suspensión de su contrato de trabajo en marzo y abril de 2020. Sin embargo, el solo testimonio de Diocares García es insuficiente para establecer que efectivamente el actor trabajó en los meses referidos mientras se encontraba suspendida la relación laboral, pues ella menciona correos en donde pudo observar cómo el actor trabaja, documentos que no han sido ni acompañados ni solicitados exhibir al juicio en miras a poder entender la efectividad que a través de tales antecedentes se podía constatar que el actor justamente se encontraba cumpliendo labores en los términos indicados.

Por lo tanto la prueba ha resultado ser insuficiente para acreditar el punto, siendo una decisión de este sentenciador el de no aplicar en este asunto el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo frente a la no exhibición del registro de asistencia.

5) Que no se pagó seguro complementario de salud para el grupo familiar en el año 2020 y el que sí se otorgaba en años anteriores siendo un derecho adquirido.

En este sentido el testigo Gómez Arcila, quien fue compañero de labores del actor, detalló que existía un seguro complementario de BCI Vida el que permitía algunas atenciones a valores preferenciales, siendo dicho seguro administrado en años previos por la aseguradora Cámara Chilena. Por su parte el testigo de la demandada Riffo Domínguez, quien es jefe de recursos humanos, señaló que existía un seguro complementario que producto de la pandemia se dejó de pagar en enero de 2020 y que la empresa lo tuvo por dos años.

Se aportó oficio de BICEVIDA en que queda claro que Constructora FAPISA S.A. contrató pólizas temporales de vida, salud y dental desde enero de 2019 a octubre de 2020.

En atención a lo expuesto, la concesión de dicho seguro por a lo menos tres años sí constituye un beneficio tácito que otorgó el empleador, pasando a ser un derecho adquirido, por la reiteración en el tiempo de tal beneficio en a lo menos un espacio temporal de tres años, entendiéndose como un consenso recíproco de las partes su aplicación práctica, y por ende, su modificación requería un acuerdo expreso de las partes, lo que en el presente caso no sucedió, por lo que también existe un incumplimiento del empleador al no haberlo otorgado para el año 2020.

6) Que no se pagó el aguinaldo de fiestas patrias del mes de septiembre de 2020, lo sí habría ocurrido en todos los años anteriores, pasando a ser un derecho adquirido.



En este punto, al absolver posiciones el representante legal de la empresa reconoce que no se pagó el aguinaldo en septiembre de 2020, refiriendo que no estaba en el contrato de trabajo estipulado y era una mera liberalidad.

Exhibió la liquidación de septiembre de 2018 y 2019 en que figura un aguinaldo de fiestas patrias por \$87.500. Ahora, en la liquidación de septiembre de 2020 aparece un haber como "aguinaldo" por \$50.000, pero el propio empleador reconoce que el por "fiestas patrias" no fue pagado en el año 2020, por lo que evidentemente, y considerando la periodicidad del pago tal aguinaldo en los años anteriores, resulta que este pasó a ser un derecho adquirido existiendo consenso recíproco de las partes en su aplicación práctica, y por ende, aunque no estuviese escriturado en el contrato de trabajo su no pago en el año 2020 sí constituye un incumplimiento al contrato de trabajo.

7) Que el empleador no cumplió con la obligación del artículo 184 del Código del Trabajo.

El trabajador indica que al volver al trabajo presencial en la oficina matriz, el día 7 de septiembre de 2020, no había ninguna norma de cumplimiento de los nuevos protocolos COVID, a no ser de un par de dispensadores de alcohol gel y un limpia pies, pero sin ningún líquido sanitizante. No hubo instrucciones, inducción, separación de espacios, ni protección ni señalética.

Es obligación del empleador el acreditar que ha dado cumplimiento en forma satisfactoria a su deber de cuidado en conformidad al artículo 184 del Código del Trabajo.

En este punto la parte demandada no aportó ninguna prueba documental relevante.

Ahora, respecto de los testigos, se contó con la declaración de Riffo Domínguez quien explicó que al volver en forma presencial en el mes de septiembre se procuró alcohol gel, amonio, termómetros, mascarillas y tenían separadores; detallando que el actor se encontraba solo en su oficina. Por su parte, Cortes Sola, quien es jefe de logística, indicó que cuando se volvió presencial el 7 de septiembre de 2020 se puso alcohol gel en todas las entradas de la oficina, alcohol cuaternario, pisadera en las entradas, termómetros, lo que le consta porque él fue quien compró los termómetros. Indicó que puso en la pizarra central instructivos y que se tomaban las medidas que daba la mutualidad. Por su parte Luis Humberto Colipi Nahuelcura, quien indicó ser el encargado de prevención de la empresa FAPISA en obras en terreno y en la central. Refirió que apoyó cuando se retomó el trabajo presencial, dando las instrucciones, y que también trabajó los documentos necesarios. Manifestó que indicó por teléfono, en la



primera semana de septiembre, las recomendaciones que dio la autoridad sobre temperatura, alcohol gel y mascarillas en espacios cerrados, pero aclarando que él no fue a la oficina central a ver que se cumpliera con aquello. Mencionó que no había prevencionista de riesgo en la oficina central y que él retornó en el mes de noviembre de 2020 en forma presencial. Respondió que no dio charlas en la oficina, no se capacitó en ese momento.

Se suma a lo expuesto que el empleador no exhibió copia de los protocolos de higiene y seguridad implementados el año 2020 con motivo de la pandemia, inducciones de higiene, copias de las facturas de compra de elementos de seguridad, copia del reglamento interno de higiene y seguridad, copia de las inducciones o charlas de inducción de higiene y seguridad de los trabajadores y firmados por los trabajadores y en especial por el demandante.

Si bien la Ley 21.342 no se encontraba vigente a septiembre de 2020, lo cierto es que en el marco general de lo que establece el artículo 184 del Código del Trabajo aparece razonable que en el contexto de la pandemia, y sobre todo considerando la situación de alerta sanitaria en septiembre de 2020, el empleador hubiese adoptado medidas certeras y eficaces para prevenir la propagación en sus instalaciones del virus COVID-19; y de la prueba rendida resulta que la testimonial es absolutamente insuficiente para establecer que cumplió con el deber de seguridad en forma debida en miras a resguardar la salud de sus trabajadores.

En efecto, el testimonio Colipi Nahuelcura, quien en los hechos fungía como prevencionista de riesgos, aunque formalmente no lo era para la oficina central, y más bien su labor fue de apoyo y de consulta, demuestra que el empleador tuvo una actitud de desidia frente a adoptar las medidas necesarias, pues finalmente no se aportó ninguna prueba que diese cuenta que se adquirieron los elementos de seguridad necesarios y tampoco se exhibieron los protocolos o capacitaciones que debiesen haberse realizado para enfrentar la contingencia sanitaria al interior de la empresa, por lo que evidentemente existe un incumplimiento por parte de la empresa en su deber en conformidad al artículo 184 del Código del Trabajo como ha indicado el actor.

**OCTAVO.** Que teniendo presente los hechos establecidos en el motivo anterior, resulta que el no pago de la remuneración del actor del mes de octubre 2020 en forma íntegra y la no declaración de sus cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de AFP CUPRUM como Isapre Cruz Blanca, sumado al hecho que se estaba incumpliendo el deber de cuidado en conformidad al artículo 184 del Código del Trabajo, sumado a que no se pagó en el año 2020 el seguro de vida que formaba ya parte de los derechos adquiridos del



trabajador, resulta un cumulo de incumplimientos contractuales que se pueden calificar como graves y no de carácter aislado, salvo la situación de la remuneración de octubre que se trata de una situación que al menos a ese tiempo era de carácter puntual, pero que unido a los otros incumplimientos dan cuenta de una situación en que el empleador no estaba ejecutando en forma debida sus obligaciones, lo que autorizaba al trabajador para desahuciar el contrato de trabajo que la unía con la demandada.

En este sentido se debe tener presente que la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de la otra, y violando uno de los contratantes cualquiera de las cláusulas del contrato, sean éstas expresas, tácitas o subentendidas, será causa suficiente para que quien resulte afectado ponga término al vínculo contractual, causa que debe ser grave y de tal entidad que produzca el quiebre de la relación contractual. Por su parte el artículo 7° del Código del Trabajo, determina que el contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

Así, se debe recordar que los hechos en virtud del cual el actor fundó su acción, decían relación con el no pago de sus cotizaciones de seguridad social, y al respecto cabe señalar que el propio legislador incorporó en el Código del Trabajo un capítulo referido a la obligación del empleador de efectuar los descuentos legales, encontrándose entre ellas las cotizaciones de seguridad social; por su parte el artículo 3, inciso segundo de la Ley 17.322, establece una presunción de derecho en torno a la efectividad de tal descuento, por la sola circunstancia de haberse pagado la remuneración, ya sea total o parcialmente, y finalmente el deber que le asiste al empleador en el artículo 19 del Decreto Ley 3500, sobre el nuevo sistema de pensiones, en relación a la declaración y pago en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquellas.

El despido indirecto representa efectivamente una terminación de contrato de trabajo, decidida por el trabajador, pero ella no es atribuible a su sola voluntad, en términos de equipararla a una renuncia al empleo, sino que su causa obedece a la actitud del empleador de haber configurado una causal de caducidad de contrato imputable a su conducta, lo que se ve confirmado con el inciso final de dicha disposición legal que expresa que: "Si el tribunal





rechazare el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha terminado por renuncia de este."

En lo que respecta a la naturaleza de las obligaciones infringida por el empleador en este caso, la misma se refiere al conjunto de obligaciones y deberes que con ocasión de los servicios establece la ley, la voluntad de las partes y la propia naturaleza del vínculo; la gravedad en este caso viene dada por la magnitud de la misma, y que justifica necesariamente el cese del vínculo contractual, considerándose con ello no sólo el carácter ocasional o permanente de la infracción que se imputa, sino que también el perjuicio ocasionado al trabajador, reaccionando de esta manera con la determinación de romper el vínculo contractual que los unía.

Por lo que, ante los evidentes incumplimientos en los que ha incurrido la demandada, se procederá a declarar que la demandada ha incumplido gravemente las obligaciones que le impone su contrato de trabajo, incurriendo con tal conducta la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, en relación a lo establecido en el artículo 171 del cuerpo legal citado, accediéndose al pago de las indemnizaciones legales pertinentes, esto es, la indemnización sustitutiva del aviso previo solicitada, años de servicio y con el recargo legal correspondiente.

Así las cosas, resulta ser innecesario pronunciarse respecto a los demás incumplimientos anotados en la carta de despido, pues los establecidos son suficientes para poner término al contrato de trabajo por la causal esgrimida por el trabajador.

**NOVENO. COBRO DE PRESTACIONES.** Que, en cuanto al cobro de feriado proporcional, en la demanda solo se solicita un monto por \$1.534.789. Ahora, quien debe acreditar que solucionó al término de la relación laboral el feriado correspondiente en conformidad al artículo 73 del Código del Trabajo es el empleador, quien no ha aportado prueba al efecto, por lo que se ordenará en pago de tal prestación en la forma que se indicará en lo resolutivo de la sentencia. Misma situación respecto del feriado legal demandando, pero en el monto que se indicará en lo resolutivo de la sentencia.

**DÉCIMO. NULIDAD DEL DESPIDO.**

Que de conformidad a lo dispuesto en los incisos 5° y siguientes del artículo 162 del Código del Trabajo, si el empleador no hubiere efectuado el pago íntegro de las cotizaciones previsionales de un trabajador al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo, sino hasta su convalidación, mediante el pago de las cotizaciones morosas, quedando probado que aún no se encuentra solucionadas



todas las cotizaciones previsionales y de seguridad social de junio de 2020.

**UNDÉCIMO. UNIDAD ECONÓMICA.**

Que se ha solicitado la declaración de unidad económica de todas las demandadas, debiendo recordarse que el artículo 3° del Código del Trabajo al respecto señala: *"Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurren a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común"*.

Se debe tener presente que solo la demandada CONSTRUCTORA FAPISA S.A. contestó la demandada negando la existencia de unidad económica con INVERSIONES LAS PATAGUAS SPA, TRANSPORTES LAS PATAGUAS SPA e INMOBILIARIA LOS ABEDULES SPA.

**DUODÉCIMO.** Que en la demanda se indica que las empresas demandadas se relacionan entre sí de la siguiente manera:

Inversiones Las Pataguas SPA, RUT 76.079.136-9, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Janio Pizarro Ríos dueño del 80% de las acciones.

Transportes Las Pataguas SPA, RUT 76.084.821-2, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Inversiones las Pataguas dueña del 100% de las acciones.

Inmobiliaria Los Abedules SPA, RUT 76.222.582-4, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Janio Pizarro Ríos dueño del 100% de las acciones.

Constructora Fapisa S.A. RUT 77.737.330-7, domiciliada en Francisco Bilbao 398, comuna de Providencia, siendo Janio Pizarro Ríos dueño del 98% de las acciones.

En tanto, y en lo que dice relación a cómo se relacionan estas empresas y complementan en el negocio común (el rubro de la construcción y el inmobiliario), se da del siguiente modo principalmente, sin perjuicio otras interrelaciones:

Inversiones Las Pataguas arrienda a Constructora Fapisa principalmente vehículos (camionetas) y equipos de construcción.

Transportes Las Pataguas arrienda a Constructora Fapisa camiones con sus conductores y mecánicos.

Constructora Fapisa es la empresa que construye para terceros obras de ingeniería civil, proyectos inmobiliarios, pero también lo ha hecho para empresas relacionadas como Inmobiliaria Los Abedules SpA. En la actualidad se encontraba en proyecto de construir un edificio en calle Bulnes, Santiago Centro, para Inmobiliaria Los Abedules, proyecto que se encuentra detenido.



Constructora Fapisa, subarrienda a las empresas antes mencionadas, su domicilio principal (oficina central) y todo el back up de personal necesario, tanto administrativo como otros.

**DÉCIMO TERCERO.** Que se solicitó exhibir copias de las escrituras de constitución social y sus modificaciones de todas las demandadas, siendo exhibidos por la demandada FAPISA los siguientes documentos:

Así de la inscripción de fecha 10 de octubre de 2007 se constata que FAPISA S.A. que se celebró la primera reunión ordinaria de directorio con los directores Janio Danilo Pizarro Ríos, Bernardo Eugenio Pizarro Ríos y don Gabriel Ernesto Videla Heredia. Apreciándose de tal documento que la sociedad se constituyó con el carácter de responsabilidad limitada por escritura de marzo del año 2002 y el 7 de agosto de 2007 se modificó y transformó en sociedad anónima, siendo el gerente general y secretario del directorio Janio Danilo Pizarro Ríos; y presidente el señor Videla Heredia.

Se aportó la escritura de constitución de INMOBILIARIA LOS ABEDULES SpA, quien fue constituida por Janio Pizarro Ríos, siendo su objeto la adquisición, enajenación, compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento y toda otra forma de administración, explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces o inmuebles, percibir y administrar sus frutos y rentas, y en general, celebrar toda clase de actos que se relacionen directa o indirectamente con el cumplimiento del objeto social, y que, siendo lícitos, él o los accionistas determinen ejecutar.

Se exhibió escritura de revocación y designación de administrador de INVERSIONES LAS PATAGUAS SpA., de fecha 28 de septiembre de 2010, en donde se indica que Janio Pizarro Ríos es dueño 80% de la sociedad, y Mariela Andrea Pizarro Sanhueza y Carlos Patricio Pizarro Sanhueza son los dueños cada uno del 10% de la sociedad., nombrándose por dicha escritura como administrador al señor Pizarro Ríos.

También se exhibió escritura de revocación y designación de administrador de TRANSPORTES LAS PATAGUAS SpA de fecha 15 de febrero de 2011, indicándose que INVERSIONES LAS PATAGUAS SpA es dueña del cien por ciento de las acciones de la sociedad Transportes Las Patagua SpA., indicándose en dicha escritura que se designaba administrador a don Janio Danilo Pizarro Ríos.

Se aportó oficio de la Dirección del Trabajo que da cuenta que todas las demandadas tienen un mismo representante legal y están domiciliadas en Avenida Francisco Bilbao N° 398 comuna de Providencia. Concluyendo que CONSTRUCTORA FAPISA S.A. tiene tres



socios Janio Pizarro Ríos, Bernardo Eugenio Pizarro Ríos y Gabriel Videla Heredia; Inversiones Las Pataguas Spa tres socios Janio Pizarro Ríos, Mariela Pizarro Sanhueza y Carlos Pizarro Sanhueza; Transporte Las Pataguas un socio Inversiones Las Pataguas Spa e Inmobiliaria Los Abedules SpA dos socios Janio Pizarro Ríos y Fondo de Inversiones Privado Avenida Locales Comerciales. Se indica que las cuatro demandadas no poseen los mismos códigos de actividades económicas, así CONSTRUCTORA FAPISA S.A. sus códigos son "construcción de edificios para uso residencial, preparación del terreno, alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, forestal, de construcción"; INVERSIONES LAS PATAGUAS SPA "fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares, compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles, actividades de consultoría de gestión, alquiler de vehículos automotores sin chofer, alquiler de maquinaria y equipo agropecuarias, forestal, de construcción"; TRANSPORTE LAS PATAGUAS SpA "transporte de carga por carretera" e INMOBILIARIA LOS ABEDULES SPA "compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles".

Al absolver posiciones el representante legal de FAPISA S.A. señaló que conoce a las otras demandas, refiriendo que Abedules SpA tiene el giro inmobiliario y adquirió un terreno en 2010 donde construyó un pequeño condominio, y por su parte, Transporte Las Pataguas tiene vehículos que arrienda a distintas empresas entre ellas a Fapisa.

Por su parte el testigo de la parte demandante Gómez Arcila, indicó que tanto él como el actor prestaban servicios para las demandadas FAPISA, Transporte Las Pataguas e Inversiones Las Pataguas y a veces para inmobiliaria Los Abedules. El demandante dependía de gerencia general, Janio Pizarro que era el gerente de Fapisa y representante de las otras demandadas. Detallando que había procedimientos que se replicaban para las otras empresas, tenían usuarios asignados para distintas funciones, estando el actor habilitado para todas las empresas, y cuando realizó él las funciones del actor también le asignaron un usuario para todas las demandadas. Señaló que inversiones y transportes arrendaban vehículos a FAPISA y esta última desarrolló obras para Los Abedules. En el mismo sentido declaró Diocares García, refiriendo que el actor era jefe de adquisiciones para todas las demandas.

Ahora, el testigo de la demandada Riffo Domínguez sostuvo que el actor trabaja en forma exclusiva para FAPISA, pero que había otras empresas "relacionadas" que tendrían otros giros y negocio. Así Transporte Las Pataguas hace transporte por camiones, Inversiones Las Pataguas compra activos como camionetas que puede arrendar a empresas "internas o externas". Respondiendo que las



HXSJXBXTPFQ

empresas internas tienen el mismo dueño que la constructora, e indicando que FAPISA prestó servicios de construcción para la Inmobiliaria. También declaró Cortes Sola, quien es jefe de logística, refiriendo que el actor trabajaba para FAPISA, respondiendo que las otras empresas tienen el mismo dueño, el representante legal Janio Pizarro, aunque no sabe si tiene otros socios y que porcentaje tiene, manifestando que en la oficina se veían cosas de Inversiones, el mismo dueño decía que hay ver esto y esto otro, recursos humanos tenía que ver también a las otras empresas. Además manifestó que FAPISA arrendaba transporte a Las Pataguas, desconociendo si Inversiones y la Inmobiliaria interactúan. También declaró que utilizó las camionetas de Inversiones Las Pataguas.

Teniendo presente lo declarado por los testigos, los antecedentes documentales y oficio reseñados, además del apercibimiento del artículo 453 N° 1 inciso 7° del Código del Trabajo respecto de las demandadas INVERSIONES LAS PATAGUAS SPA, TRANSPORTES LAS PATAGUAS SPA e INMOBILIARIA LOS ABEDULES SPA., permite tener por establecido que las demandadas tienen una dirección laboral común que era ejercida por el señor Janio Pizarro, quien solicitaba al actor en definitiva que prestase funciones en forma indistinta para todas las demandas, las que si bien tiene giros diversos resultaban ser complementarios, sumado al hecho que finalmente se observa que todas estas sociedades tenían un controlador común en donde la participación mayoritaria sobre la propiedad societaria era el referido representante legal. Resulta decidir que finalmente se hable de "empresas internas", en donde tal concepto solo se puede entender, en el contexto descrito, como empresas de un mismo dueño, y es claro que estas empresas se relacionaban para prestar servicios destinados a ejecutar labores que podían beneficiar a todo el entramado societario y los giros particulares que cada una desarrollaban, siendo notorio que el actor, como encargado de adquisiciones realizaba sus labores en forma indistinta para todas las sociedades, por lo que se declarará que constituyen una unidad económica y un único empleador para todos los efectos legales, conforme al artículo 3° del Código del Trabajo.

Ahora, aquella alteración de la individualidad del empleador no puede entenderse como un subterfugio en miras a eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, pues la prueba rendida no da cuenta de aquello, siendo que la situación que generó los incumplimientos del empleador obedecen a hechos que suceden en el último año de la relación laboral y que es muy posterior a la forma en que funcionaban estas empresas como unidad



económica. En consecuencia, se rechazará la solicitud de subterfugio.

**DÉCIMO CUARTO. PRUEBAS NO REFERIDAS EXPRESAMENTE.** Que los medios de prueba que no han sido expresamente referidos, y demás alegaciones, en nada alteran lo concluido en los motivos precedentes.

**DÉCIMO SEXTO. COSTAS.** Que cada parte soportara sus costas al estimar que existió motivo plausible para litigar y al encontrarse en rebeldía las demás demandadas.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 63, 73, 160 N° 7, 162, 168, 171, 172, 173, 184, 420, 425, 432, 444, 453, 454, 456, 459 y 507 del Código del Trabajo; 144, 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1545, 1698 del Código Civil; y demás normas legales vigentes, SE DECLARA:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por **ROMAN JACOB ARQUEROS PIZARRO** en contra de su ex empleador **FAPISA S.A.**, declarándose que ha incumplido gravemente las obligaciones establecidas en el contrato de trabajo, y por lo tanto, se acoge la acción por despido indirecto y nulo debiendo la demandada pagar la siguiente prestaciones:

a) Indemnización sustitutiva de aviso previo, por la suma de \$1.958.067.

b) indemnización por años de servicio por la suma de \$21.538.737.

c) recargo legal del 50% en conformidad al artículo 171 del Código del Trabajo por la suma de \$10.769.368.

d) feriado legal por \$ 4.830.845 correspondiente a 81 días y proporcional por la suma de \$1.302.114.

g) Deberá enterar las cotizaciones de seguridad social adeudadas de junio de 2020 respecto de la cotización de Isapre Cruz Blanca y AFC.

h) Que el despido indirecto ejercido por el demandante no ha producido el efecto de poner término a la relación laboral en las condiciones que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, debiendo la demandada pagar remuneraciones y demás prestaciones de origen laboral desde la fecha de la separación, ocurrida el 28 de octubre de 2020, y hasta su efectiva convalidación, entendiéndose por tal la del pago de las cotizaciones adeudadas. Para tales efectos deberá comunicarse, por la vía más expedita, en la etapa ejecutiva, a dichos organismos, con la finalidad que inicien el cobro de tales conceptos.



II.- Que las sumas ordenadas pagar en forma precedente, deberá serlo con los reajustes e intereses que se establecen en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que las demandadas **CONSTRUCTORA FAPISA S.A., INVERSIONES LAS PATAGUAS SPA, TRANSPORTES LAS PATAGUAS SPA** e **INMOBILIARIA LOS ABEDULES SPA** constituyen una unidad económica en los términos del artículo tercero del Código del Trabajo, quedando obligadas de manera solidaria al pago de las indemnizaciones y prestaciones ordenadas pagar en los puntos precedentes.

IV.- Que en todo lo demás se rechaza la demanda.

V.- Que cada parte soportará sus costas de acuerdo con lo indicado en el motivo final de la sentencia.

VI.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día hábil.

Regístrese, notifíquese en virtud de lo dispuesto en el artículo 457 del Código del Trabajo, dese copia autorizada a la parte que lo requiera y archívense los antecedentes en su oportunidad.

**RIT: O-6600-2020**

**RUC: 20-4-0301355-3**

Dictada por don **Daniel Alejandro Ricardi Mac-Evoy**, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



HXSJXBTPFQ

A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>